

# La sociedad civil de cara al conflicto y a la paz

*Patricia Fernández Correa*  
*Directora Regional Antioquia*  
*Corporacion Viva la Ciudadania*

La sociedad civil se manifiesta por la paz, aunque no sea motivo de reseña por parte de los medios de comunicación y mucho menos digno de un editorial de los periódicos de circulación nacional. El pasado sábado 9 de septiembre en el municipio de Cocorná, a 67 kilómetros de Medellín, en el oriente de Antioquia, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) fue recibida por más de 600 personas de la subregión, en su mayoría víctimas de este conflicto, con la esperanza de aliviar no sólo su corazón, sino también de resarcir en algo las pérdidas materiales que les ha dejado como herencia. Tantos años de violencia no han logrado extinguir la confianza y la fuerza para anhelar un futuro mejor, motor que los impulsa a reclamar, pero también a construir caminos de reconciliación en pro de la consecución de la paz.

Los integrantes de la CNRR, (Ana teresa Bernal, Patricia Buriticá y Jaime Jaramillo Panesso) presentaron su propuesta estratégica y operativa de un programa nacional de reparaciones, que pueda convertirse en una política de Estado con un Programa Institucional de Reparación Colectiva y acciones encaminadas a recuperar:

"La institucionalidad del Estado Social de Derecho, particularmente en las zonas más afectadas por la violencia"... "La CNRR asume el concepto de reparación integral, el cual hace referencia, por un lado, a la necesidad de concebir las reparaciones como parte del proceso de justicia transicional, que incluye, además, el esclarecimiento de la verdad, la reconstrucción de la memoria histórica, la aplicación de la justicia y las reformas institucionales... Y por otro lado, se refiere al necesario balance que debe existir entre las reparaciones materiales y las simbólicas, así como entre las reparaciones individuales y colectivas."

Ante la amplitud de la propuesta, así como las condiciones de aplicabilidad reales, sujetas a: "el patrón de violación y la gravedad de la misma, el perfil de los beneficiarios, las capacidades institucionales y la disponibilidad de recursos financieros", no fue fácil el proceso deliberativo con los participantes. Hay una gran expectativa generada y difusa la respuesta en tiempos y recursos disponibles para reparar.

Según datos presentados en el evento, Antioquia reporta 4.719 desaparecidos, de los cuales han aparecido vivos 1.887, muertos 453, continúan desaparecidos 2.379. Sólo el oriente antioqueño alcanza 413 desaparecidos. Hay pendientes 245

exhumaciones por realizar en el departamento, de las cuales 166 están en el oriente. Estos son de casos reportados, pero conocemos el subregistro existente. El oriente antioqueño se movilizó, como históricamente lo ha hecho, y le sigue poniendo la cara al conflicto, pero también a la paz. Las autoridades locales y departamentales también lo hacen y allí se hicieron presentes. Brillaron por su ausencia los senadores y representantes autores de la ley 975. Además, extrañó y causó revuelo la no presencia del Presidente de la Comisión, Eduardo Pizarro, quien canceló su viaje en el último momento.

De manera simultánea, en la ciudad de Medellín se llevó a cabo la séptima Plenaria Regional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, con la asistencia, por primera vez, del Alcalde de la ciudad. También se hicieron presentes los secretarios de Gobierno Municipal y Departamental, y el Personero delegado para los Derechos Humanos. Así, más de 350 hombres y mujeres de todo el departamento, al igual que en el oriente y en muchos otros espacios anónimos y silenciosos del territorio nacional, siguen generando acciones por la paz.

Fue un día de trabajo, desarrollado en mesas temáticas en torno a la negociación política, las víctimas, la agenda mínima y el movimiento de paz. Al final del evento, la plenaria estuvo de acuerdo en clamar a una sola voz por una salida política y negociada al conflicto armado; en pedir compromisos y acuerdos humanitarios; en reclamar respeto y reconocimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación integral a las víctimas. Tampoco faltaron las propuestas: constituir una comisión de esclarecimiento histórico o comisión de la verdad; trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de los procesos de la sociedad civil por la paz, con base en una agenda común; alcanzar la paz por el camino del fortalecimiento de la democracia y el desarrollo económico con soberanía, justicia social y equidad; proclamar en el 2010 el II grito de independencia por la paz, la democracia y contra la guerra; y convocar en el año 2007, en el marco de las elecciones locales, a toda la sociedad colombiana a realizar un plebiscito nacional por el cese al fuego.

Como estas, se vienen desarrollando y proponiendo otras iniciativas y propuestas de construcción de paz en el país como: la Asamblea regional de organizaciones de Derechos Humanos, el Congreso nacional de iniciativas de paz, el Mosaico de la Memoria, las buenas prácticas para superar el conflicto, la Asamblea Departamental de Asambleas constituyentes municipales y la V Plenaria Nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.

Hombres y mujeres responden al llamado, convencidos de la paz y de la construcción de un proyecto político, público y democrático, que condena el uso de la violencia ejercida por cualquier actor armado, al margen de la ley y la combinación de todas las formas de lucha; defiende la legalidad y busca la legitimidad de las instituciones, pero también reclama honestidad y

transparencia en el ejercicio de lo público, así como voluntad política para la resolución de los problemas, sociales, económicos, políticos.

En tal sentido, cómo entender que en medio de estas propuestas no se asuma que lo que está en juego es la vida misma, y en tal materia la política no puede ser la improvisación.

Muchos esperábamos el anuncio del despeje de Florida y Pradera por parte del presidente Álvaro Uribe, así fuera para distraer la atención del país que no sale del desconcierto tras la noticia del atentado montado por las fuerzas militares en las vísperas del acto de la posesión de su segundo mandato. Pero no fue así. No reconoció las enormes muestras de corrupción que presenta la institución que debería defender a los colombianos, y no son hechos aislados como se quiere presentar, es un rosario de situaciones recurrentes. Tampoco alivió, aunque fuera un poco, la angustia de quienes desde la condición de víctimas esperan volver a ver a sus seres queridos. ¡Que indolencia!

No sólo es incierto un acuerdo humanitario. La agenda de paz sigue embolada. Desde la frustración del Caguán hasta hoy, lo único que se ha vislumbrado con las FARC-EP es un posible canje que no logra concretarse por la falta de voluntad de los actores. Mientras tanto, los familiares, amigos y el país entero estamos expectantes e impotentes a la espera de un milagro o algo que haga entrar en razón a unos y otros.

La Casa de Paz del ELN aunque tiene mayores posibilidades de avance, no pasa de ser un ejercicio exploratorio, sin encontrar el camino de un proceso de negociación. Y qué decir del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, desarrollado a punta de improvisaciones, sin rumbo cierto y dando palos de ciego ya que no obedece a un acuerdo de Estado. Para completar el espectáculo, el gobierno nacional emprende un “gran proceso” de deliberación y consulta nacional de los decretos reglamentarios de la Ley de Justicia y Paz, a través de la página Web y el correo electrónico, pretendiendo desconocer el fallo de la Corte Constitucional sobre dicha ley. ¿Será que los 3.8 millones de desplazados, para poner un ejemplo, podrán acceder a estos medios para expresar lo que piensan? La respuesta es obvia.

Resulta trágico que una nación que pretende superar el conflicto muestre unas divergencias tan rotundas entre la sociedad civil y el Estado. Mientras la primera se moviliza y clama por la paz, el Estado permanece sordo al sentir ciudadano. Mientras se hacen llamados por una política seria para la reconciliación, desde el Estado se juega a la guerra y se burlan de la paz. Mientras evento por evento la sociedad civil clama por la verdad, la oferta del Estado es la mentira, como método. Y mientras la sociedad civil le pone la cara a la paz y al conflicto el Estado desconoce los hechos que la realidad señala con el dedo. Igual respuesta recibimos de los grupos armados ilegales. La esperanza está viva pero amenaza marchitarse.

[Patricia.fernandez@une.net.co](mailto:Patricia.fernandez@une.net.co)